

REF: ACCION DE TUTELA N°257404089001 2021 00182 00.

JUZGADO PROMISCOVO MUNICIPAL DE SIBATE
Sibaté, mayo siete de dos mil veintiuno

Se encuentran al Despacho las presentes diligencias a fin de proferir la decisión que en derecho corresponde respecto de la petición de acción de tutela instaurada por señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE.

ANTECEDENTES

La señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO instauró ante este Despacho acción de tutela en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE, solicitando se tutelén los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre, trabajo y a la defensa.

Como fundamento de su petición la accionante narra los hechos indicando que el día 13 de marzo del 2021 por correo electrónico envió 2 derechos de petición ante la Secretaria de Transito y Movilidad de Sibaté, solicitando se le informe sobre unos supuestos comparendos (foto multas) con N°27189095 del 06/07/2020 y N°27191723 del 12/03/2020.

Que nunca fue notificada en su debido tiempo como lo ordena la ley, ya que se enteró por un mensaje de texto enviado por la entidad de Transito Ricaurte; la cual para haber hecho la reclamación de manera inmediata ya que el vehículo lo había vendido hacia cuatro 4 meses antes del hecho figurado. Que a la fecha (abril 21 del 2021) no le han contestado el derecho de petición en los términos de la ley y que se da el silencio administrativo a favor del accionante.

Que según la Secretaria de Transito y Movilidad, a su cargo se inició un proceso de cobro coactivo, derivado de la citada contravención, que jamás se le notificó de dicho proceso y el auto que la admite a trámite, conforme lo establece el Estatuto Tributario.

Que el proceso contravencional de transito es un proceso de naturaleza administrativa sancionatorio y como tal se rige por los mismos principios que informan el derecho punitivo del estado, lo que en otras palabras hace expresamente aplicable el debido proceso.

Aclara que el vehículo con de placas CXI 313 se vendió el vehículo con mucha anterioridad a la fecha de dichos comparendos al señor PEDRO ANTONIO PIRATOBA ORTEGA, que ella se encontraba laborando en la ciudad de Neiva cuando empezó el confinamiento total por el COVID -19 que le toco teletrabajo; motivo por el cual nunca pudo estar en dichos municipios.

Tare a colación el Artículo 29 de la Constitución política de Colombia, sentencias C 530/2020 y C 980/2010, C 038/2020.

Que no ha contado con un mecanismo de defensa en un proceso ilegítimo mientras no puede realizar trámite alguno ocasionándole daños y perjuicios como es el del traspaso del vehículo mientras dichos comparendos sigan cargados por una extralimitación en el ejercicio de las funciones de la Secretaria de Transito y Movilidad de Sibaté.

Que los hechos anteriores constituyen una violación a los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a la igualdad y al derecho de petición. Hace referencia a los artículos, 13, 23, 29, 53, 87 de la Constitución Política de Colombia, sentencia T-296/1.987, C-038-2020

Pretende se tutele a favor de la accionante el derecho fundamental a la defensa, al derecho de petición, al debido proceso, al derecho al buen nombre, se orden a la accionada que se exonere de dichas infracciones (foto multas) ya que no es la persona que cometió los supuestos comparendos y por ningún medio se demostró las supuestas foto multas. Que se solicite copia del expediente con base a los comparendos N°27189095 y N°27191723 en su totalidad con el fin de determinar si con ello es procedente, la entidad accionada no ha procedido de conformidad a la ley no hay aplicado el debido proceso tanto en la contestación de la petición, silencio administrativo y la extralimitación en el

ejercicio de las funciones al dictar una Resolución con mandamiento de pago por cobro coactivo sin derecho a la defensa, por lo que solicita se compulsen copias a los organismos del estado, que se ordene a la Secretaria de Transito y Movilidad de Sibaté se levanten dichos comparendos y con ello la Resolución de mandamiento de pago por jurisdicción coactiva. Que revoque los comparendos foto multas por lo expuestos, y se elimine del SIMIT O SIETT.

Allega como pruebas la accionante lo relacionado en el acápite de pruebas.

Este Juzgado avoco conocimiento y dispuso por el medio más eficaz notificar en legal forma a la accionada, para lo cual se libraron las comunicaciones como obra en el expediente.

JOSE ALBEIRO CASTILLO MARTINEZ, obrando en calidad de Profesional Universitario de la Sede Operativa Sibaté de la Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, ejerciendo su derecho a la defensa da respuesta a la acción de tutela instaurada por la señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO argumentando que la accionante elevo un solo escrito petitorio en fecha 13 de marzo de 2021. Que dicha petición mediante Oficio CE- 2021553974 de fecha 21 de abril de 2021 se brindó respuesta de fondo a lo solicitado y se envió al correo electrónico claudia.carvajal78@gmail.com

El accionado hace una descripción del proceso contravencional de tránsito seguido respecto a la orden de comparendo N°27191723 de fecha 12 de marzo de 2020.

Que el 12 de marzo de 2020, fue detectada a través de medios electrónicos la comisión de la infracción contenida en el artículo 131 literal C29 de la Ley 769 de 2002, modificada por la ley 7383 de 2010, por lo que fue expedida la Orden de Comparendo N°27191723, que para resguardar la presunción de inocencia del propietario del vehículo y el derecho fundamental al debido proceso, derecho de contradicción y derecho a la defensa, se procedió a remitir notificación personal del proceso contravencional de tránsito infracción detectada por medios electrónicos, comparendo N°27191723, a la última dirección registrada en el RUNT al momento de la comisión de la infracción, siendo la AV 26 No. 5-99 Neiva, que dicho envío se surtió mediante guía N°2065741969, la cual fue registrada "Devuelto al Remitente", que al no ser efectivas las notificaciones por correo, se procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

Que en aras de garantizar el debido proceso al propietario del vehículo de placa CXI313 y en miras de que los actos administrativos sean conocidos por los presuntos infractores o responsables de la comisión de la infracción se efectuó mediante: Aviso el cual fue publicado en la Página <http://cundinamarca.circulemos.com.co>, así como en cartelera informativa, en aras de garantizar la publicidad del inicio del proceso contravencional, esa Sede Operativa de Sibaté, procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

Que la orden de comparendo No. 27190378 fue validada el día 14 de marzo de 2020 y como se avizora en guía referida con antelación, el envío se efectuó en fecha 17 de marzo de 2020, esto es al segundo día hábil siguiente a la validación del comparendo, cumpliendo estrictamente lo dispuesto en la norma. Que posteriormente la señora accionante no se acercó personalmente a la Sede Operativa de Transito para objetar la infracción o presentar la defensa, que mediante Acta de Audiencia Pública N°5540 del 29 de septiembre de 2020 se procedió a vincularla jurídicamente, conforme lo dispuesto en la Ley 1843 de 2018 artículo 8 Parágrafo 3 en concordancia con lo dispuesto por los artículos 135 y 137 del Código Nacional de Transito modificado por la Ley 1.383 de 2010, que se fijó fecha para continuación de audiencia con motivo de tomar una decisión de fondo respecto al proceso contravencional, auto notificado conforme lo estipulado en el artículo 139 del Código Nacional de Tránsito. Que el 22 de octubre de 2020 mediante Resolución N°10424 la señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO fue declarada contraventora de las normas de tránsito y le fue impuesta como sanción multa decisión que conforme al artículo 139 del Código Nacional de Tránsito fue notificada en estrados.

El accionado hace una descripción del proceso contravencional de tránsito seguido respecto a la Orden de Comparendo N°27189095 del 6 de julio de 2020.

Que el día 6 de julio de 2020, fue detectada a través de medios electrónicos la comisión de la infracción contenida en el artículo 131 literal C29 de la Ley 769 de 2002 por lo que fue expedida la Orden de Comparendo N°27189095, que para resguardar la presunción de inocencia del propietario del vehículo y el derecho fundamental al debido proceso, derecho de contradicción y derecho a la defensa, se

procedió a remitir notificación personal del proceso contravencional de tránsito infracción detectada por medios electrónicos, comparendo N°27189095, a la última dirección registrada en el RUNT al momento de la comisión de la infracción, siendo la AV 26 No. 5-99 Neiva, que dicho envío se surtió mediante guía N°2081268262, la cual fue registrada "Devuelto al Remitente", que al no ser efectivas las notificaciones por correo, se procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

Que en aras de garantizar el debido proceso al propietario del vehículo de placa MBP018 y en miras de que los actos administrativos sean conocidos por los presuntos infractores o responsables de la comisión de la infracción se efectuó mediante: Aviso el cual fue publicado en la Página <http://cundinamarca.circulemos.com.co>, así como en cartelera informativa, en aras de garantizar la publicidad del inicio del proceso contravencional, esa Sede Operativa de Sibaté, procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

Que la orden de comparendo N°27189095 fue validada el 10 de julio de 2020 y como se avizora en guía referida con antelación, el envío se efectuó el 15 de julio de 2020, esto es; al segundo día hábil siguiente a la validación del comparendo, cumpliendo estrictamente lo dispuesto en la norma. Que la señora accionante no se acercó personalmente ni a través de apoderado a la Sede Operativa de Tránsito para objetar la infracción o presentar la defensa, que mediante Acta de Audiencia Pública N°4378 del 29 de septiembre de 2020 se procedió a vincularla jurídicamente, conforme lo dispuesto en la Ley 1843 de 2018 artículo 8 Parágrafo 3 en concordancia con lo dispuesto por los artículos 135 y 137 del Código Nacional de Tránsito modificado por la Ley 1.383 de 2010, que a su vez se fijó fecha para continuación de audiencia con motivo de tomar una decisión de fondo respecto al proceso contravencional, auto notificado conforme al artículo 139 del Código Nacional de Tránsito. Que el 22 de octubre de 2020 mediante Resolución N°9288 la señora accionante fue declarada contraventora de las normas de tránsito y le fue impuesta como sanción multa decisión que conforme al artículo 139 del Código Nacional de Tránsito fue notificada en estrados.

Que se expone la no vulneración al derecho al debido proceso de la Accionante, pues al ser la aquí debatida una infracción captada por medios electrónicos, el Legislador le otorgó al inculpado un periodo de 11 días posteriores a la comisión de la infracción para que acudiera al organismo de tránsito si su deseo era objetar dicha orden comparendo, presentar descargos o aportar pruebas que desvirtuaran la comisión de dicha infracción, derecho del cual no hizo uso la accionante y en dicho orden de ideas, se continuó con el proceso contravencional en su contra, de conformidad con lo estipulado en la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de 2010, artículos 135, 136 y 137.

Que en ningún momento se vulneró el derecho al trabajo, como quiera que los actos proferidos en desarrollo del proceso contravencional adelantado en razón a la orden de Comparendo N°29216088 del 21 de octubre de 2020, no le impiden al accionante ejercer cualquier otra actividad de las diversas existentes para su sustento. Trae a colación la sentencia T-047/1995.

Solicita se declare improcedente el amparo de la presente acción como quiera que el accionante, a través de este procedimiento preferente, pretende es constituir una instancia más para la revisión del proceso originado por la violación una norma de tránsito, olvidando que el juez de tutela debe entre otros preservar el orden jurídico y la especialidad de la jurisdicción. Trae a colación, Decreto 2591 de 1991 y la sentencia C-530/2003

Que la acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio, puesto que no se vislumbra la presencia de un perjuicio irremediable en aras de proteger los derechos fundamentales de la parte accionante, entendido el perjuicio irremediable como lesión grave inminente irreversible, por las consecuencias graves para la vigencia de los derechos fundamentales amenazados. Que la accionante pretende que por medio de la presente Acción Constitucional se tomen las medidas correspondientes a derechos de carácter económico, situación derivada de un Acto Administrativo, esto es; un conflicto de carácter Administrativo y sobre derechos de orden legal, sin que se demuestre tampoco la existencia de un perjuicio irremediable, por lo cual es improcedente por vía de Acción de Tutela.

Que existe otro medio de defensa judicial consistente en acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y demandar la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se le declaró contraventor de las normas de tránsito y se le impuso una sanción, con el consecuente restablecimiento del derecho.

Solicita negar el amparo solicitado en contra de ese Despacho y el archivo de las diligencias. Así mismo, solicita desestimar las pretensiones de la accionante, toda vez que el proceso contravencional fue adelantado de conformidad con lo establecido en la norma, especialmente en el artículo 8 la Ley 1843 de 2017.

Allega como pruebas los relacionados en el acápite de pruebas.

CONSIDERACIONES

En virtud del derecho constitucional establecido en el art. 86 la señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO, acude ante el juez a fin de que mediante un trámite preferencial y sumario se le tutelen los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, buen nombre, trabajo y a la defensa, consagrados en la Constitución Política.

El art.1º preceptúa: *“...Colombia es un estado Social de derecho organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general...”*

Nuestra Carta magna en su art. 2 indica: *“... Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo...”*

El art. 23 preceptúa: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”*.

Artículo 29. *“...El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea indiciado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso...”

Revisadas las presente diligencias pretende la accionante se le tutele el derecho de petición incoado ante la accionada. Tenemos en la contestación que hace la accionada y en los documentos aportado que la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATE da contestación al derecho de petición incoado por la accionante mediante Oficio CE- 2021553974 del 21 de abril de 2021 brindando respuesta de fondo a lo solicitado y se enviando la respuesta al correo electrónico claudia.carvajal78@gmail.com el 29 de abril de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior se desprende que el derecho de petición fue contestado y como en reiteradas oportunidades se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, *“ Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado...”*

Es así como de conformidad con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se entiende que la respuesta dada para resolver de fondo la cuestión planteada, es sin importar si es a favor o en contra de las pretensiones del solicitante.

Ahora corresponde a este Despacho pronunciarse sobre la petición de tutela de la hoy accionante, respecto de que se exonere de dichas infracciones, se levanten los comparendos y la Resolución de mandamiento de pago por jurisdicción coactiva y que se revoquen los comparendos foto multas eliminándolos del SIMIT o SIETT, no sin antes verificar la procedencia o no de la presente acción, al respecto observamos el reglamento de la acción de tutela y es así como el Decreto 2591 de 1991 en su art.6 preceptúa: *"La acción de tutela no procederá": "Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante."*

Es improcedente cuando el accionante dispone de otros medios de defensa judicial. La acción de tutela no es por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que, por su naturaleza, según la Constitución, es el único medio de protección, precisamente incorporado en la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos. Se comprende, en consecuencia que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario, no puede pretenderse adicionar al trámite ya suscrito, una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la C.P. dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección. "... Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional disciplinaria Sentencia: Abril 26 de 2001, Expediente 2001-9005 0183-10.

También, la Corte Constitucional tiene dicho que la acción de tutela tiene un carácter residual en virtud del cual su procedencia es excepcional, esta subsidiariedad *"obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios constitucionales de independencia y autonomía de la actividad judicial"* (C.C., T-501/16).

La jurisprudencia Constitucional determinó que, debido a la naturaleza jurídica del acto administrativo que sanciona la contravención de tránsito, el medio para controvertir la multa será la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a la que se puede acudir incluso dada la eventual falta de notificación de los actos administrativos y aun cuando no hubiesen interpuesto los recursos en la vía gubernativa, puesto que justamente esas irregularidades deben estudiarse por el juez contencioso como generadores de la nulidad.

Al respecto la jurisprudencia constitucional tiene dicho:

"(...) La naturaleza jurídica de la resolución mencionada corresponde a la de un acto administrativo particular por medio del cual se crea una situación jurídica. Por ende, cuando el perjudicado no esté conforme con la sanción impuesta, el mecanismo judicial procedente será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual permite resarcir el daño causado injustificadamente a un derecho subjetivo".

Debe tenerse en cuenta que, uno de los requisitos para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es haber interpuesto los recursos en sede administrativa, sin embargo, cuando no se hubiesen presentado porque las autoridades no lo permitieron, no es posible exigir ese requisito. La falta de notificación de los actos administrativos, implica que los afectados no tengan conocimiento de los pronunciamientos de la administración y, por ende, constituye una barrera para el ejercicio de los recursos procedentes, en consecuencia, cuando la falta de interposición de recursos obedezca a la falta de notificación, es posible acceder al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando no se hubiere agotado ese requisito de procedencia. (C.C., T-051/16).

En efecto las Resoluciones expedidas dentro del caso que nos ocupa por la infracción de tránsito son un acto administrativo. Conforme lo dispone el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de estos actos.

En este caso se persigue, por esta vía residual y subsidiaria, cuestionar una decisión administrativa que según lo indica la norma, pueden controvertirse a través del medio de control ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, la accionante no hizo uso de este instrumento, pese a que cabe alegar la indebida notificación.

Tampoco se demostró la existencia de alguna condición que hiciera a la accionante sujeto de especial protección constitucional, ni siquiera se advierte la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues la sola imposición de la multa no configura un daño que justifique la intervención del juez constitucional.

Por consiguiente, si bien la accionante reclama que la accionada no la notificó en debida forma, ni esto ni nada de lo acreditado en el expediente la releva de acudir al juez contencioso para atacar dicha decisión. Por lo que evidentemente la tutela resulta improcedente, ya que no opera como una herramienta paralela a los procedimientos judiciales ordinarios. Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que no se cumple con lo establecido en el Decreto 1295 de 1991 para acudir a la acción de tutela por cuanto se dispone de otros medios de defensa judicial.

Son los anteriores presupuestos con los que cuenta este Despacho para declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por la señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA-SEDE OPERATIVA DE SIBATE.

Esta decisión se ha de notificar por el medio más eficaz, advirtiéndole a la parte accionante y a la accionada, que la anterior decisión es susceptible de Impugnación, de no ser así, se ha de remitir a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibate Cundinamarca, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

R E S U E L V E

Primero. Declarar la IMPROCEDENCIA de la presente acción de tutela incoada por la señora CLAUDIA MILENA CARVAJAL HENAO quien se identifica con la C.C.Nº26.428.848 de Neiva, en contra de la de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA – SEDE OPERATIVA DE SIBATE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Notifíquese la anterior decisión a la parte accionante y a la accionada, mediante cualquier medio idóneo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992.

Tercero. La anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser impugnada, remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

N O T I F I Q U E S E Y C U M P L A S E

La Juez,

MARTHA ROCIO CHACON HERNÁNDEZ.